

Javier Zarzalejos, en la clausura del ciclo FAES
Estado de Derecho y promoción de la democracia
29.04.2024

Agradezco especialmente su presencia porque este acto en el que presentamos las conclusiones del proyecto “Estado de derecho y promoción de la democracia” quedará marcado en nuestro recuerdo. Cuando alguien nos pregunte dónde estábamos mientras el presidente del Gobierno anunciaba su decisión, todos recordaremos que asistíamos a un acto de la Fundación FAES.

Y un acto, este de hablar de estado de derecho y promoción de la democracia, que tiene mucho que ver con la situación inédita, lamentable y peligrosa que atraviesa nuestro país.

Magníficos académicos y expertos han analizado el tema de este proyecto centrándose en nueve países y en el ámbito específico de la Unión Europea.

Las conclusiones no son tranquilizadoras.

Pero tan importantes como las conclusiones son los procesos que han llevado al deterioro de las instituciones democráticas, a la deslegitimación de la democracia liberal, al retorno de las lacras y amenazas que a punto estuvieron de acabar con la democracia representativa en Europa no hace tanto tiempo.

En este sentido quisiera apuntar algunas reflexiones que serán desarrolladas con más acierto y conocimiento en el diálogo que se va a mantener a continuación.

En primer lugar, el discurso antidemocrático es una parte esencial en la emergencia de los poderes revisionistas que aspiran a quebrar un orden internacional basado en normas.

Los nuevos totalitarismos, los sistemas iliberales, los populismos ya no son formas “domésticas” de gobierno, sino que se presentan como alternativas más eficaces y mejores a la democracia liberal

En segundo lugar, los derechos humanos, la exigencia de gobiernos limitados, la expresión de la voluntad popular a través de elecciones libres, están perdiendo, si es que no han perdido ya, su proyección universal.

En la medida en que la identidad ha desplazado a la ciudadanía como el pilar del discurso político, toda apelación a valores universales que queremos reconocer para todos, más allá de cualquier condición que los defina, es impugnada como autoritaria, impositiva y cancelable. Como un producto del neocolonialismo cultural de Occidente.

Lo más grave no es que los derechos fundamentales tal y como los formuló la comunidad internacional en la declaración de 1948 sean impugnados desde ámbitos culturales que van desde el islam al indigenismo. Lo malo es que, en el propio ámbito occidental, la radicalización identitaria y el auto-odio lleva a muchos a negar esa universalidad. Nosotros somos los principales agentes de nuestro descrédito.

Por otra parte, parece haberse extendido una idea del Estado como mero proveedor de servicios que priva a las instituciones democráticas de su sentido y se abre a considerar como legítimas, e incluso más ventajosas, otras alternativas políticas autoritarias que tendrían más éxito en este objetivo.

Un Estado como proveedor que tiene que afrontar las demandas crecientes de grupos que se sienten legitimados para exigir como sujetos de un catálogo inacabable de derechos. Un Estado que carga sobre sí la responsabilidad imposible de hacer felices a sus ciudadanos. Y como eso es imposible, la decepción se transforma muchas veces en la ira adolescente de quienes solo se ven como titulares de derechos y exentos de deberes. Una democracia sin deberes cívicos no es sostenible.

De ahí que no se puede obviar la progresiva deslegitimación de las narrativas democráticas.

En España vivimos un proceso de “contra-Transición”, de reversión del proceso de reconciliación y pacto constitucional que empieza por el revisionismo de la izquierda y el oportunismo de los nacionalistas para presentar la Transición como un acuerdo fraudulento de olvido para la prolongación del franquismo por otros medios.

Cuando el presidente del Gobierno se exhibe impúdicamente rodeado de restos de víctimas de la Guerra Civil, no hay duda de que estamos en un peligroso camino de regresión política, cívica -y diría que moral- alentada desde el poder.

En el ámbito europeo, la deslegitimación de la Unión por parte de la derecha radical sigue las mismas pautas de intento de destrucción de un legado inigualable en la historia europea de paz, democracia y prosperidad.

En esta deslegitimación del discurso democrático encuentra su mejor terreno la desinformación.

El Brexit fue en buena medida la suma del patriotismo nacionalista inglés y de la desinformación rusa.

Una desinformación que es una estrategia que se nutre de nuestras vulnerabilidades culturales. Una desinformación que se nutre de una matriz cultural basada en las filosofías de la sospecha, la deconstrucción, la negación de sentido, eso que Scruton llamó la “máquina del absurdo”, que deja a la democracia sin un suelo de verdades compartidas, como un simple procedimiento de toma de decisiones sin valores sustantivos en que fundarse.

La conspiranoia, los bulos sobre las vacunas, la destrucción de la imagen democrática de Europa, la proliferación de relatos deslegitimadores de la democracia, la sospecha de que todo es una estratagema de un poder oculto y malvado deben mucho más a Michel Foucault, el gran icono filosófico de la izquierda europea, que a Vladimir Putin o Marine le Pen.

Señoras y señores, queridos amigos y amigos:

Si hoy hubiéramos iniciado este proyecto, seguramente habríamos dado un espacio singular a España.

Demonización de los jueces objeto de una agenda cada vez más explícita de control partidista;

Descalificación de los medios -no todos obviamente- lo que lleva al líder a buscar la comunicación directa con “la gente” -escribase gente entre comillas- a través de las redes sociales;

movilización de la afición propia con discursos encendidos que les hacen creer que son los guardianes de la democracia;

sentimentalización hasta la náusea del discurso político;

destrucción del partido propio para convertirlo en una simple plataforma de proyección personal;

exaltación mesiánica del líder.

Permítanme aclarar que no, no hablo de Donald Trump.

Hablo de la instalación del populismo en la política española; del intento de acabar con los frenos y contrapesos del sistema, de acabar con la mediación de las instituciones representativas; de quebrar el respeto a los procedimientos.

Hablo de calumnias a jueces proferidas en el Congreso; de amenazas -sí amenazas- a medios de comunicación independientes y profesionales; de apelaciones a intervenir al Poder Judicial y expedientar a jueces porque admiten a trámite denuncias.

Y hablo de la destrucción del principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, primero con la amnistía en favor de sediciosos y malversadores y ahora con la pretensión de inmunidad y de impunidad de quienes se sienten amos del poder.

Quien anunció que levantar un muro contra 11 millones de españoles sería su empeño en esta legislatura, se duele de las críticas. Quien utiliza sin ninguna restricción todos los poderes de un Gobierno y más allá, acusa a otros de tejer una trama para destruirle. Quien llegó al Gobierno sobre una malintencionada imputación al partido entonces en el poder introducida sin motivo en una sentencia, habla ahora de “lawfare.”

Lo que sabemos con toda certeza es que el esfuerzo en favor de la democracia no admite respiro. Nada puede darse por supuesto, ni la paz en Europa, ni la prosperidad, ni la integridad de la democracia.

De modo que permítanme una cita de autoridad y recordar en esta grave coyuntura histórica que, sí, que quien pueda hacer, que haga.

Esta fundación, desde luego, lo va a seguir haciendo.

